

Entre el barrio, la calle y el Estado: el Movimiento Barrios de Pie, las políticas sociales y el trabajo. Córdoba, 2001-2007.

María José Franco

Docente de Metodología de la Investigación Social I y de Teoría Sociológica y Modernidad en la Escuela de Trabajo Social e integrante de equipo de investigación sobre Democratizaciones contenciosas en el pasado reciente argentino en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

Mail: mariajosefranco2010@gmail.com

Eje temático: El mundo del trabajo en el post-neoliberalismo.

Ponencia

La emergencia de diferentes organizaciones y movimientos de resistencia a la implementación de las políticas neoliberales junto con la posterior llegada al poder presidencial de gobiernos “progresistas” en algunos países de América Latina, configuran parte de las condiciones de fin y comienzo del nuevo milenio en la región.

Sostenemos en esta ponencia que, en el caso de Argentina, la crisis y post crisis del 2001 - crisis económica, política y de “representatividad” (Rinesi y Vommaro, 2007) emblemática en la frase “que se vayan todos”¹ - abrió una oportunidad para el cuestionamiento de los modos en que se venían resolviendo los conflictos en democracia en el país; para la disputa sobre las problemáticas y necesidades comunes y sobre los sujetos, espacios y formas legítimas de dirimirlos. Se iniciaba así lo que Perez – retomando la noción de “demodiversidad” de Boaventura de Souza Santos – caracteriza como un proceso de “experimentación con formas deliberativas y participativas de gestión del conflicto democrático que requieren de una permanente imaginación institucional capaz de articular a las instituciones públicas con las transformaciones del trabajo, las comunicaciones y las identidades políticas” (2013: 56).

En ese proceso, entre otros actores y colectivos, las organizaciones de trabajadores desocupados que habían nacido a mitad de los ‘90, adquirieron importante participación y legitimidad en el espacio público, al tiempo que fueron modificando su vínculo con el Estado; en especial, en relación a las políticas de asistencia social (y del trabajo) que también atravesaron importantes transformaciones.²

1 Cabe mencionar que la demanda por la que se pedía una renovación de los representantes políticos y que se construyó bajo la consigna “que se vayan todos” aglutinó una diversidad de sentidos en un abanico que incluyó desde la impugnación del orden – como lo sostuvieron algunas organizaciones de desocupados – hasta un pedido de restauración de los ahorros confiscados por los bancos - como el caso algunos ahorristas o los “acorralados”-, entre otros.

2 En nuestras sociedades capitalistas, los sistemas de seguridad social surgieron y se conformaron como contrapunto de las instituciones de asistencia; asentado en el principio de auto valía, a partir de ese momento, la población no propietaria debe trabajar para vivir y todo aquel que no lo haga debe demostrar, en principio, su validez. Y cuando la propiedad queda socialmente legitimada surge la necesidad de justificar la exclusión y de definir también alguna forma de derecho para los pobres (De Swaan, 1992: 23). La separación entre trabajo y pobreza es fundamental, entonces, no solo por lo que describe sino - y principalmente- por lo que produce, por los sentidos y las prácticas que genera (y desde las que se genera). Sentidos y prácticas que, el contexto de la post crisis del 2001, también abrió para su disputa.

A comienzos del 2002, tras la renuncia anticipada de De la Rúa y la asunción de Duhalde a la presidencia - con un discurso de pacificación social y fuertemente restaurador³ - desde el Estado Nacional, se propusieron resignificaciones sobre las características y alcances de la crisis, sobre las problemáticas, los asuntos comunes y el rol de diferentes actores sociales, que se plasmaron en una de las primeras medidas que tomó el presidente - junto a la devaluación del peso argentino y el llamado a la concertación social - la creación del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJyJHD) para quienes vivían en condiciones de pobreza y desocupación.⁴ Estos sentidos y estas políticas fueron redefinidos con la posterior asunción de Nestor Kirchner a la presidencia, y el llamado a la institución de una “nueva normalidad”, la convocatoria amplia a diferentes actores sociales - entre ellos algunas organizaciones de trabajadores desocupados - a la construcción de un proyecto de transversalidad y su propuesta de modificación de la política asistencial vigente, particularmente en relación al PJyJHD en octubre del 2004.

A nivel de la Provincia de Córdoba, el gobierno de De la Sota había lanzado desde el año 2000 la reforma del Estado en alianza con el capital privado y con el respaldo de los organismos de crédito internacional, redefiniendo las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Esta concepción tuvo una línea de continuidad con la gestión de Kamerath a nivel municipal hasta la asunción de Juez en la intendencia de la ciudad capital.⁵ Por aquel entonces, Juez había adherido al proyecto de la “transversalidad” y había convocado a referentes de organizaciones sociales a participar de la gestión municipal hasta el fin de su mandato en diciembre del 2007.

Este fue parte del contexto de surgimiento del Movimiento Barrios de Pie en Córdoba, una organización de desocupados que ya venía con un largo proceso previo de trabajo territorial-barrial en diferentes provincias del país, particularmente en Córdoba, ciudad donde surge su organización madre: la Corriente Nacional Patria Libre. Nos proponemos en esta ponencia analizar esta experiencia como un lugar desde el que indagar las transformaciones que se operaron en las acciones colectivas de algunas organizaciones sociales y su relación con el Estado a nivel nacional y local; en particular, en relación a las políticas sociales (y al trabajo), en la post crisis del 2001. En este período se produjeron cambios en los modos en que esta organización articuló su trabajo en el territorio y con otras organizaciones sociales, *entre* lo territorial, la acción colectiva de protesta y - luego del 2004- la gestión a nivel del Estado nacional y en varias provincias y municipios del país; entre ellos, la Municipalidad de la ciudad de Córdoba.

3 La pacificación declamada incluyó momentos de gran tensión, como lo que se conoció como la “masacre de Puente Pueyrredón” - producida el 26 de junio de 2002 - y en la que Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una feroz represión a una protesta protagonizada por organizaciones piqueteras.

4 El PJyJHD, creado por Decreto N° 565/02, consistió en un subsidio “no remunerativo” de entre 150 y 200 pesos mensuales a cambio de una serie de contraprestaciones que debían realizar los “beneficiarios”: jefes o jefas de hogar “desocupados” con hijos a cargo de hasta 18 años de edad o discapacitados de cualquier edad, o jefa de hogar, cónyuge, concubina o cohabitante en estado de gravidez. Asimismo, podía hacerse extensivo a “desocupados” jóvenes y a mayores de sesenta años que no hubieran accedido a una prestación provisional. Si bien el programa establecía siete componentes como posibilidad de contraprestación, el comunitario fue el que finalmente más se desarrolló (Neffa: 2008). La contraprestación requerida en el plan tiene como antecedente una serie de programas sociales “workfare” que introdujeron - en los años ‘80 en EEUU y en Inglaterra y hacia fines de los ‘90 en Argentina - la obligatoriedad de una actividad laboral como contrapartida de los beneficios aportados por los programas sociales, desde una particular concepción de lo público y lo político que veía en el Estado de Bienestar una de las causas del desaliento a la búsqueda de autoabastecimiento por parte de los sujetos (Kymlicka y Norman; 2002). Por otra parte, si bien es posible reconocer en el PJyJHD ciertas líneas de continuidad con algunas políticas sociales elaboradas por el Estado Nacional desde mitad de los ‘90 - descentralizadas, “comunitarizadas” (Danani; 2005) y atentas a las pautas de los organismos de crédito internacional - este programa se masificó, llegando a cubrir en el año 2003 a 1.987.875 destinatarios en todo el país (Cels; 2003). En el caso de Córdoba Capital, los PJyJHD fueron unos 54 mil PJyJHD entre fines de 2003 y comienzos del 2004 (“Informe Estadístico II” del Ministerio de Producción y Trabajo; 2003; La Voz del Interior; 02/08/2004), cuando la cantidad de desocupados en la ciudad sumaban 91.221, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH - 2º trimestre de 2004).

5 En el 2002, Juez había sido destituido como fiscal anticorrupción en el marco de sus denuncias a funcionarios/as delasotistas, entre los/as que se incluía la por entonces esposa del gobernador de Córdoba, Olga Riutort (La Nación, 11/10/2002).

Nos preguntamos, entonces, ¿Qué oportunidades se abrieron y cerraron para esta organización en particular con la post crisis del 2001? ¿Qué acciones colectivas desarrolló, cuáles fueron sus demandas y sus modos de inscripción pública, su relación con el Estado y con las políticas asistenciales (y del trabajo) y en qué condiciones se desarrollaron? ¿Qué transformaciones, qué borramientos y corrimientos se produjeron a lo largo de estos 6 años y qué temporalidades pueden reconocerse? ¿De qué modo se modificó el trabajo político de esta organización cuando sus demandas fueron interpretadas por el Estado? ¿En qué medida estas transformaciones se articularon con la trayectoria previa de este colectivo?⁶

La política en movimiento

La relación entre el Estado y las organizaciones sociales, mediada por políticas sociales ha sido un tema abordado desde diversos trabajos académicos. Parte de esa bibliografía ha concebido a estos programas como respuestas estatales disciplinadoras - no represivas- a la demanda de trabajo; es decir, como estrategias tendientes a institucionalizar las acciones de protesta de organizaciones de desocupados apuntando a su desmovilización a partir de mecanismos de negociación en relación a estos programas y otros de ayuda alimentaria (Delamata, 2004; Svampa y Pereyra, 2003; Massetti, 2006). La versión más extrema de estos procesos se sintetiza en algunos trabajos en la categoría de “cooptación” (Ciufolini, De la Vega: 2010). Otra bibliografía, haciendo foco en la politicidad “positiva” en los sectores populares y los procesos de territorialización - que incluye la protesta pero también la negociación para la supervivencia y/o para garantizar ciertos derechos básicos -, introducen la metáfora de la “caza” para nombrar las estrategias que los sectores populares desarrollan con respecto a las políticas asistenciales diseñadas desde el Estado (Merklen, 2005). Desarrollos más recientes recuperan la categoría de “profanación” de Agamben para dar cuenta del proceso de apropiación no solo utilitario de estas políticas por parte de las organizaciones sociales (Maneiro, 2013). Por otra parte, algunos trabajos etnográficos ponen de relieve la diversidad de prácticas que tensionan algunas perspectivas analíticas reificadas que enfatizan la distinción normativa entre los movimientos sociales y el Estado (Manzano, 2008: 13). En sintonía con esta última perspectiva otras producciones se proponen poner en tensión las nociones de “autonomía” y “heteronomía” de las organizaciones sociales respecto del Estado y recuperan la noción de “institucionalización” para abordar estos procesos (Natalucci, 2010).

463

Entendemos que en estas interpretaciones subyacen distintas concepciones y relaciones entre “lo social” y “lo político”. Por un lado, aquellas concepciones que ponen el acento en la cuestión disciplinar por parte del Estado presuponen una relación de externalidad entre sociedad y Estado, una fisura entre el espacio social y el político, en la que una eventual “institucionalización” de los movimientos sociales supone su disolución en la coalición de gobierno y en el Estado – “homologado a lo político”, en palabras de Natalucci y Pagliarone (2013) –. Por otro lado, quienes como Merklen (2005) desarrollan una perspectiva de la territorialización de la acción procuran recuperar la politicidad positiva de los sectores populares como modo de afiliación frente a la desestructuración de la sociedad salarial. Sin embargo, se reintroduce cierta externalidad entre lo social y lo político toda vez que el Estado se presenta como el objeto de aquella negociación, protesta o caza.

De este modo, desde perspectivas distintas, no logra saldarse cierta “encrucijada teórica” – al decir de Germán Perez (2010) – entre movimientos sociales y política institucionalizada, fractura que dificulta pensar creativamente el vínculo entre movimientos sociales y democracia.

Proponemos, entonces, para analizar esta relación entre organizaciones y Estado recuperar de la noción de “hegemonía” de Gramsci la compleja unidad entre coerción-consenso; en tanto proceso

6 Trabajamos para ello con metodología cualitativa, con fuentes orales y escritas que incluyeron entrevistas a cuadros medios y altos del movimiento, cartillas, volantes y revistas. Los avances que se presentan en esta ponencia son parte de nuestra tesis doctoral en curso, realizada con becas de CONICET.

de disputa, de dominación y lucha en las que agregamos - ambos actores, con poderes desiguales, constituyen el producto de la acción de sujetos situados en relaciones sociales y de fuerza. De ahí que acordamos con Manzano (2014) cuando propone desplazar la excesiva atención puesta en la política de los movimientos para captar “la política en movimiento” desde un enfoque relacional.

La conformación del Movimiento Barrios de Pie. La identidad piquetera, la lucha contra el hambre, la demanda de trabajo y el crecimiento territorial.

El Movimiento Barrios de Pie (MBP) nació en diciembre de 2001, como producto de una definición del partido - la Corriente Patria Libre (CPL) - y de un conjunto de colectivos de trabajadores/as desocupados/as - con relaciones diferentes respecto de la CPL - que venían desplegando sus acciones en distintas provincias del país y que decidieron conformar una organización que los nucleara a nivel nacional. Durante el año 2002, Barrios de Pie se asentó en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y en doce provincias de la Argentina entre las que se encuentra Córdoba, provincia donde surge la CPL. Su constitución, como veremos más adelante, también coincide con su inminente alejamiento de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

La CPL surge a fines de 1987. Sus miembros fundadores, traían experiencia de militancia en los años '70 en el PRT-ERP, el Partido Intransigente, Montoneros y organizaciones de la Tendencia Revolucionaria del Peronismo y otras. Se definían, por aquel entonces, como “de izquierda nacional, popular y revolucionaria”⁷. A comienzos de la década de los '90, la CPL se asentaba principalmente en la ciudad de Córdoba - aunque también logró instalarse en algunas localidades del interior, como Alta Gracia y Cruz del Eje, entre otras-. Entrada la nueva década y a medida que se iba profundizando la crisis y las organizaciones piqueteras comenzaban a tener mayor presencia en el espacio público, sus referentes principales profundizaron un proceso de construcción en el conurbano bonaerense y en otras provincias del país. El partido fue pasando de lo que definía como un período de resistencia a una apuesta a la reconstitución del movimiento revolucionario nacional. En ese camino, en Córdoba, desarrolló su trabajo en tres frentes, articulando con otros actores sociales: el territorial - vecinal - con el colectivo Córdoba desde Abajo, predominantemente centrado en la lucha contra el hambre y la pobreza; el juvenil - principalmente universitario, con la organización Venceremos y posteriormente como parte del Frente Estudiantil Universitario (FEU) -; y - menos desarrollado - el sindical a través de la Corriente 1ro. de Mayo.

464

En 1999 la CPL decide integrarse a la Central de Trabajadores Argentinos, en el marco de su estrategia de construir un “nuevo proyecto nacional” frente la “modelo liberal”; un plan de lucha que integre a distintos sectores sociales y que implique:

“(…) soberanía frente a los poderosos del orbe, con crecimiento económico y una más justa distribución de la riqueza, con inserción en el mundo pero a partir del mercado interno vigoroso que integre en un pie de igualdad a todas las provincias, con un Estado fuerte que cuide del patrimonio nacional, defienda al débil y controle al poderoso, donde haya igualdad real de oportunidades para todos, trabajo y justicia social con democracia en serio, participativa, sin represión ni impunidad.”⁸

Desde allí, recuperando su trayectoria previa, desarrolló su trabajo territorial como “CTA de los barrios” y a través de la conducción del frente juvenil de la CTA. Con esta identidad participó

7 Revista En Marcha, marzo de 1988.

8 Corriente Nacional Patria Libre “Documentos Aprobados y discursos del acto de apertura. 3º Congreso Nacional”. Argentina, 17, 18 y 19 de junio de 2000.

activamente en la consulta popular impulsada por el Frente Nacional Contra la Pobreza (FRENAPO) en el año 2001 y - junto a otros actores - contra la firma del Acuerdo de Libre Comercio para América (ALCA). La consulta popular plebiscitaba la creación de un seguro de empleo y formación para todos los desocupados. Esta propuesta retomaba la demanda proveniente de las organizaciones de desocupados en relación a la creación de “trabajo genuino” y la de otros sectores de la sociedad que comenzaban a engrosar las filas de la desocupación y el trabajo precario.

Sin embargo, las diferencias con dirigentes del espacio de la FTV se fueron profundizando y en diciembre del 2001, se decide crear el Movimiento Barrios de Pie, como estrategia de diferenciación de la Corriente Patria Libre respecto de la conducción de la CTA, en relación a la lectura de los acontecimientos de diciembre de 2001.

Por estos años, la organización reivindicaba su identidad piquetera y centraba su disputa “en la lucha contra el hambre y la pobreza y la oposición a las medidas de los gobiernos subordinados a las exigencias del FMI”; en el logro de “trabajo genuino”; y en la solución inmediata a lo que definía como “problemas más acuciantes” como la educación, la salud y la provisión de los servicios indispensables para una vida digna. Sus principales antagonistas a nivel externo, fueron los organismos de crédito internacional y las grandes potencias; los principales destinatarios de sus demandas, a nivel interno, fueron el gobierno y el Estado - en sus distintos niveles - en tanto éste se había corrido- aunque no ausentado- a favor de “intereses ajenos a las necesidades de las mayorías”⁹, al servicio de los sectores económicamente dominantes. Desde ese lugar, el MBP decidió “ocupar” el lugar dejado por el Estado en los barrios de las distintas provincias donde desarrolló su trabajo territorial a través de la organización de comedores populares y merenderos o copas de leche; roperos comunitarios; equipos para el mantenimiento y desmalezamiento de terrenos; espacios de apoyo escolar y alfabetización; talleres de educación popular; bibliotecas populares; campañas de salud y formación de agentes de salud; talleres sobre violencia familiar; actividades vinculadas con la cultura y la comunicación; entre otras.¹⁰ Las huertas, las panaderías comunitarias y otro tipo de emprendimientos como manualidades y artesanías, al menos en esta etapa en Córdoba, no lograron sostenerse en el tiempo o superar la producción a pequeña escala y artesanal (Entrevista a coordinadora provincial, 2014). Entre tanto, ente el 2002 y el 2003 se desarrolló la campaña “El hambre no puede esperar”, con el objetivo de enfrentar la crisis alimentaria en el marco de una profunda crisis económica. El trabajo territorial se expandió, especialmente, en relación a los Centros Comunitarios, donde funcionaron comedores y merenderos. El sostenimiento de algunos de estos espacios, se procuraba a través de algunos subsidios del gobierno de la provincia, a través del FOPAR¹¹ y, en la mayoría de los casos, a través de la ayuda voluntaria y solidaria de vecinos e instituciones de la zona donde los centros estaban asentados. Para el 2003 Barrios de Pie en Córdoba contaba con diecinueve comedores, donde se atendían dos mil niños y veintitrés copas de leche que llegaban a otros mil ochocientos.¹² Como señala uno de los coordinadores provinciales en Córdoba:

“El Estado está ausente, el Estado no existe, en aquel momento, no?, entonces el Estado somos nosotros, tenemos que generar tal nivel de referencia en los barrios para que la gente vea que nosotros podemos resolver el tema del hambre, el tema del trabajo, desde las organizaciones, desde la organización popular, y eso es “poder popular””. (Entrevista a coordinador provincial, 2010)

9 Movimiento Barrios de Pie: “Qué es y qué hace el Movimiento Barrios de Pie”. Disponible en: www.barriosdepie.org (acceso el 12/11/2003).

10 Datos extraídos de una base propia elaborada a partir de información brindada por la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral -Córdoba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

11 A partir del dictado de la Emergencia Sanitaria y Alimentaria, el decreto 108/02 determinó la reconversión del FOPAR - que databa del año 1996- en un programa alimentario.

12 Movimiento Barrios de Pie, volante de distribución callejera “Por Trabajo, dignidad y poder popular”. Córdoba, año 2003.

Si bien para todos los referentes entrevistados, el MBP - a diferencia de otras organizaciones de desocupados del período - surge como una organización explícitamente política, la relación entre las discusiones y estrategias promovidas por el partido CPL con el trabajo del movimiento tuvo su complejidad y algunos límites respecto de la posibilidad de construir “poder popular” e involucrar a la totalidad de los integrantes del MBP en un proyecto de cambio social, más allá de la coyuntura de crisis. Esta dificultad se acentuó con el importante crecimiento que experimentó el MBP entre el 2002 y el 2003, luego de su ruptura definitiva con la FTV.¹³

En el año 2002, Barrios de Pie se integró al Bloque Piquetero Nacional junto con el Polo Obrero, la CCC y la FTV. Diferencias históricas dentro de la izquierda impidieron que se lograra una expresión política de ese espacio, y finalmente la ruptura con CTA se produjo en diciembre de ese mismo año (Natalucci A., 2008).

El 2002 y el 2003 fueron años de importantes movilizaciones, acciones de protesta y confrontación callejera a través de la ocupación del espacio público, principalmente con el formato de piquete y corte de ruta o calle. Como señala Natalucci, se trató de una etapa en que la expectativa de la organización “(...) giraba en torno a poder consolidar una estrategia de movilización y de confrontación, donde se resaltaba el carácter destituyente de la política» (Natalucci, 2010: 105).

En Córdoba, las protestas en reclamo de planes de empleo y alimentos e insumos para sostener los comedores y los merenderos se extendió a lo largo del 2002.¹⁴ Se agregaron también marchas junto con el Bloque Piquetero en reclamo de un boleto estudiantil y planes de capacitación para jóvenes.¹⁵ Las movilizaciones estuvieron dirigidas principalmente al gobierno provincial y nacional pero también a empresas para demandar asistencia alimentaria.¹⁶ La relación con el gobierno provincial y municipal también fue de oposición absoluta. Con respecto al por entonces intendente Kammerath, el MBD se involucró – junto con otras organizaciones – en el pedido de su revocatoria.¹⁷

Barrios de Pie, también participó ese año de la Marcha Federal con movilizaciones de las agrupaciones piqueteras en distintas provincias bajo la consigna “Que se vayan todos. Por otro 19 y 20”. Frente al avance de la protesta, principalmente en Buenos Aires y en vísperas del primer aniversario de los estallidos de diciembre de 2001, el gobierno nacional dispuso fuertes medidas de seguridad para contener las movilizaciones. El 20 de diciembre, la conmemoración de la caída del gobierno de De la Rúa encontró a las organizaciones divididas. En Córdoba, Barrios de Pie y el Bloque Piquetero realizaron un acto en Plaza de la Intendencia, donde exigieron el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el 19 y 20 de diciembre del 2001, así como la renuncia del presidente Duhalde, el gobernador De la Sota y el intendente Kammerath. Por su lado, la Multisectorial -de la que participaban la CTA, junto a la Izquierda Unida y diversos gremios y asambleas vecinales- confluyó en el Patio Olmos, donde se produjeron acciones contra edificios asociados con las políticas de los '90 en el imaginario del activismo: el propio Patio Olmos y la sede de la UCR (Franco, Medina, 2012).

La masificación de los planes de empleo durante el gobierno de Eduardo Duhalde había sido acompañada por la constitución de los Consejos Consultivos. Si bien la CPL había definido no participar en este espacio, en Córdoba, Barrios de Pie se integró a esta estructura a fines del 2002. Luego de la destitución de su presidente, el movimiento aceptó una dirección rotativa. Se trató de la primera experiencia del MBP en la gestión de políticas sociales a nivel del Estado. El trabajo en ese espacio fue altamente conflictivo¹⁸ por las limitaciones del propio Consejo, de los planes sociales y por las características, expectativas y prácticas de los distintos actores que lo integraron;

13 La Voz del Interior. Córdoba, 01/7/2002.

14 La Voz del Interior. Córdoba, 24/4/2002 5A.

15 La Voz del Interior. Córdoba, 18/9/2002 4A.

16 La Voz del Interior. Córdoba, 4/12/2002, 3A.

17 Movimiento Barrios de Pie. Comunicado de prensa, 06/10/2002. Disponible en: www.barriosdepie.org.ar

18 La Voz del Interior, 6/9/2002, 3A; 22/03/2003; 04/01/2003, A4; 23/01/2003, A3; 23/02/2004, A4.

entre ellos, según relatan diversos entrevistados, la importante participación de las redes punteriles del delasotismo. La participación en este espacio y la movilización, le permitieron al Movimiento conseguir una importante cantidad de PJyJHD (Coordinadora provincial del MBP, 2014).

A lo largo del 2003 continuaron las movilizaciones exigiendo aumento de salarios, planes, subsidios para desocupados y alimentos. Tras lo que el MBP denunció como “campanas mal intencionadas” por parte del gobierno provincial que pretendía “involucrar a las organizaciones de piqueteros en el cobro indebido de planes Jefes y Jefas de Hogar”, el movimiento denunció el manejo clientelar de planes por parte de los partidos políticos y del gobierno provincial en el marco de la campaña electoral.¹⁹ A mediados de año, la organización sacaba en Córdoba el volante “¿Sabías que los piqueteros luchan por ellos, por nosotros, por vos, por Ud...?”, en el que discutía con las representaciones que los medios reproducían sobre los piqueteros: la violencia, la vagancia, la molestia que generan los cortes de ruta, el cobro indebido de planes, entre otras. Comenzaba a opacarse el período en el que la construcción política que incluía al corte de ruta como modalidad predominante de intervención en el espacio público, había gozado de cierta legitimidad; en particular, a fines del 2001 y comienzos del 2002, en el marco de la crisis económica, social y de representatividad y cuando aún se escuchaban cánticos de algunos sectores que versaban “cacerolas y piquetes, la lucha es una sola.”

Ese año, además, poco antes de las elecciones presidenciales - en el mes de marzo- Barrios de Pie junto a otras organizaciones piqueteras realizaron importantes marchas en todo el país rechazando lo que denominaban la “farsa electoral”²⁰ (Franco, Medina, 2012). En esas elecciones, el movimiento llamó a sus militantes a votar “que se vayan todos”.

En el año 2004, se cierra esta etapa en la historia de Barrios de Pie y se abre una nueva temporalidad que Natalucci (2008) caracteriza como de “institucionalización del reclamo” y que nosotros proponemos caracterizar como de participación en la coalición de gobierno, de disputa a través de (y en) la gestión del Estado y de reconfiguración del trabajo territorial.

La incorporación del Movimiento a la coalición de gobierno, la disputa a través de (y en) la gestión del Estado y la reconfiguración del trabajo territorial.

Con las elecciones del año 2003, no sólo se producen realineamientos políticos tanto a nivel nacional como municipal sino que - como ya lo anticipamos al comienzo de esta ponencia - el nuevo gobierno nacional planea transformaciones en un sentido impugnador de las políticas neoliberales imperantes. Desde su discurso de asunción el presidente Néstor Kirchner propuso reconstituir el proyecto nacional, subordinar la economía a la política, recuperar el rol de Estado y fortalecer los vínculos con otros países latinoamericanos, generando una alianza estratégica regional. Al mismo tiempo, llamó a la búsqueda de una estabilidad política que instituyera una “nueva normalidad” y replanteó el rol de las organizaciones sociales convocándolas a formar parte del proyecto de “transversalidad”, transformando las políticas sociales vigentes. En lo que a política asistencial respecta, se promovía lo que se planteaba como una apuesta al fortalecimiento de “proyectos productivos y de trabajo con base territorial”. Como expresó alguna vez el ex presidente Kirchner al referirse a la relación que se proponía mantener con las organizaciones sociales - “ni palos ni planes” -, el objetivo sería “no cambiar nuevos empleos por trabajos precarios” sino ir generando políticas activas de empleo y disminuyendo la cantidad de planes sociales al tiempo que se iban reconfigurando las relaciones con dichas organizaciones. Desde este lugar, en octubre de 2004, por decreto 1506/04, se planificó el traspaso del PJyJHD -dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación - a otros planes que este gobierno impulsaría desde los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación sobre la base de las acciones desarrolladas a partir de cuatro programas nacionales: los denominados “Plan Nacional Familias”, “Plan Integral de Promoción del Empleo” -“Más y Mejor Trabajo”-, el “Plan

19 Movimiento Barrios de Pie, volante de distribución callejera “Por Trabajo, dignidad y poder popular”. Córdoba, año 2003.

20 La Voz del Interior. Córdoba, 12/3/2003, 3A.

Nacional de Desarrollo Local y Economía Solidaria” – “Manos a la Obra”-, el “Plan de Seguridad Alimentaria” – “El hambre más urgente”-, así como otros que pudieran crearse.

En este marco, Barrios de Pie evaluó que las condiciones políticas habían cambiado, que se habrían oportunidades favorables para el accionar del Movimiento, entre otras, con el llamado a nuevos sectores a su incorporación en los espacios de representación gubernamental. Las políticas impulsadas por Kirchner expresaban importantes definiciones contenidas en los documentos del 3º Congreso Nacional realizado por la CPL en junio del 2000 y su apuesta de creación de un nuevo proyecto nacional. A mitad del 2004, Barrios de Pie decidió adherir al proyecto de transversalidad y firmó el documento la “Hora de los Pueblos” elaborado por el Frente de Organizaciones Populares entre las que se incluían la Federación Tierra y Vivienda (FTV), el MTD Evita y el Frente Transversal Nacional y Popular de la CTA.²¹

Asimismo, a finales del 2004, el MBP definió integrarse a la coalición de gobierno nacional y ocupar espacios de conducción de algunas secretarías a nivel del Estado. Entre ellos, su Coordinador Nacional - Jorge “Huevo” Ceballos - se hizo cargo de la Dirección Nacional de Asistencia Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En otras provincias del país, también se incorporaron otros militantes del MBP a la gestión del Estado. En el caso de Córdoba, la ruptura de más de dos décadas de bipartidismo que se produjo con el triunfo del Frente Nuevo – conducido por Luis Juez - en la gestión de la municipalidad y su adhesión al proyecto de la “transversalidad”, habrían generado condiciones para que varios militantes del MBP aceptaran la propuesta de incorporarse a la gestión del Estado municipal. Se incorporaron como responsables de la Dirección de Desarrollo Territorial y Economía Social, de la Subdirección de Hábitat Popular, de la Subdirección de Capacitación para el Desarrollo Social, entre otras subdirecciones. El trabajo a nivel municipal, permitió impulsar la creación de 32 cooperativas de vivienda, de un centro de reciclaje con organizaciones de cartoneros, entre otras iniciativas. Sin embargo, el trabajo desde el estado municipal – y también nacional- encontró diversos límites; en ellos, los vinculados a cuestiones presupuestarias, de burocracia estatal y, en algunos casos, por las particularidades de los propios proyectos.

468

En diciembre de 2004, la revista En Marcha 218 titulaba: “Por un Nuevo Proyecto Nacional Junto a Kirchner y Juez por una Córdoba de Pie”. Esta decisión de integrarse a las coaliciones de gobierno nacional iba sostenida, además, con una redefinición de su relación con el Estado – ya no concebido como actor externo al que se demanda sino como espacio de disputa – y con una transformación su modo de trabajo territorial, menos centrado en el hambre, el desempleo y los planes sociales.

En relación al Estado, como señaló Perelmiter (2010), los militantes fundamentaron su involucramiento desde una doble narrativa: como “continuidad” con el trabajo social territorial a través del cual las organizaciones conforman una “red de resolución de problemas en los barrios” y como mediación entre el Estado y el territorio, “disolviendo las distancias entre la representación institucional y la representación sectorial”. Con esos sentidos, uno de los programas más importantes trabajados a nivel nacional fue el de Promotores Territoriales.

A mitad de década, a medida que se incrementaban los puestos de trabajo y los planes asistenciales daban paso al crecimiento en empleo formal – sumando cerca de 700.000 trabajadores los que pasaron del PjyJHD a algún tipo de trabajo regular (Tomada, 2007) –²² el trabajo territorial de tipo más asistencial comenzó a mermar – del mismo modo que la proporción de militantes - y la actividad de los Comedores y Merenderos se transformó. En Córdoba, con el Promotores Territoriales, los Centros Comunitarios se transformaron en “Unidades de Trabajo y Participación”:

“(…) convertimos nuestros coordinadores en promotores territoriales. Entonces, la

21 Página 12, 22/06/2004.

22 Durante el gobierno de Kirchner la creación neta de puestos de trabajo subió a más de tres millones, implicando además un incremento del empleo registrado del 27,7% acumulado entre 2003 y 2007 (Cortes, 2009: 17).

compañera que era coordinadora de un centro comunitario, piquetera histórica, que andaba siempre pidiendo bolsones y haciendo lío por todos lados, ahora era una promotora territorial. Que viajaba a Chapadmalal, que se formaba, que hacía cursos, que aprendía a hacer talleres, que discutía la cuestión de, de las políticas sociales. Un salto en calidad, impresionante” (Coordinador provincial de Barrios de Pie, 2014)

En el marco de estos cambios, el trabajo territorial ya no sólo incluía la movilización callejera²³ sino también – y principalmente - el trabajo por áreas que funcionaban en estas “Unidades de Trabajo y Participación”; entre ellas, Salud, Género, Cultura y Comunicación, Educación Popular, Microemprendimientos y Gestión, Juventud y Derechos Populares. Las áreas recuperaron la experiencia y la organización previa del movimiento al tiempo que abrieron nuevos ejes de intervención. Cada área estuvo constituida por coordinadores, promotores, militantes y vecinos. Otros programas nacionales que el MBP también trabajó en Córdoba fueron el Familias y el Plan de Seguridad Alimentaria que en Córdoba se conoció a través del “Vale lo nuestro”. A través del área de Educación se desarrolló primero el programa “Yo si puedo”; luego, el programa Encuentro.

En abril de 2006, el MBP lanzó una nueva estrategia política y junto con el Partido Comunista Congreso Extraordinario, la Agrupación Martín Fierro, el Frente Barrial 19 de Diciembre y la Agrupación Envar el Kadri el MBP creó Libres del Sur. El objetivo era nuclear a otras organizaciones que se inscribían dentro del kirchnerismo pero que no estaban directamente vinculadas con el Partido Justicialista. Su conformación reforzaba la estrategia de construir un proyecto político nacional, con capacidad de intervención en diferentes poderes del Estado –como el Poder Legislativo– y en las distintas instancias gubernamentales, a nivel municipal, provincial y nacional. (Natalucci, 2010:104)

A modo de cierre

La crisis económica, social y de representatividad del 2001 abrió una oportunidad para el cuestionamiento de los modos de resolución de los conflictos en democracia; de las problemáticas y necesidades comunes; y de los sujetos, espacios y formas legítimas de dirimirlos. En particular, el MBP encontró una posibilidad de desarrollo como organización de piqueteros y como espacio de representación de parte de los “incontados” de las décadas previas. Se trató, para el movimiento, de un período de articulación con diferentes organizaciones de trabajadores desocupados, de crecimiento y profundización del trabajo, “entre” lo territorial –principalmente a través de merenderos y copas de leche- y la movilización callejera con un sentido predominantemente destituyente, contra el Estado y centrada en la problemática del hambre, la falta de trabajo y la demanda de planes sociales. Si en los ‘90 se trataba principalmente de políticas asistenciales focalizadas y descentralizadas, en el 2002 en cambio, las políticas sociales se desarrollaron como respuesta a la crisis y a la demanda de las organizaciones de desocupados, fundamentalmente a través de la creación de uno de los programas más masivos hasta el momento como fue el caso del Plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados.

Luego del triunfo de Kirchner como presidente en las elecciones del 2003, y a medida que mejoraban los índices de empleo en el país, al tiempo que el MBP resolvía su incorporación al proyecto de “transversalidad” para la reconstrucción de un proyecto nacional, la disputa a través de (y en) la gestión del Estado nacional - y en Córdoba también a nivel municipal -, y la reconfiguración

23 Entre 2004 y 2005, el Movimiento participó de una serie de manifestaciones contra el ALCA, en el e cierre de la Cumbre de los Pueblos en noviembre de 2005; con escraches simultáneos a estaciones de servicio Shell, Esso y Repsol, en apoyo a las gestiones presidenciales de control de precios (Natalucci, 2010). En Córdoba, además, también participó de otras movilizaciones, entre ellas contra Aguas Cordobesas.

del trabajo territorial en diferentes “areas” de intervención, implicó una transformación en la identidad del movimiento, en las acciones colectivas que emprendió, en su relación con el Estado y las políticas sociales (y del trabajo), y en los modos de inscripción en el espacio público mediático. Estos cambios, a nuestro juicio no pueden ser comprendidos en su complejidad si se analizan desde categorías que reponen cierta exterioridad entre “lo social” y “lo político”. De allí, nuestra propuesta de recuperación de una perspectiva relacional del vínculo entre las organizaciones y el Estado que reintroduzca la compleja unidad entre coerción-consenso; en tanto proceso de disputa, producto de la acción de sujetos históricamente situados en relaciones sociales y de fuerza.

Bibliografía

- Centro de Estudios Legales y Sociales (2003): “Plan Jefas y Jefes ¿Derecho Social o beneficio sin derechos?”. Disponible en: www.cels.org.ar (acceso el 16/06/2008).
- Ciuffolini, Alejandra (Comp) (2007): En el llano todo quema: movimientos y luchas urbanas y campesinas en Córdoba de Hoy, Cba, EDUCC- Danani, Claudia (2008): “América Latina luego del mito del progreso neoliberal: las políticas sociales y el problema de la desigualdad” *Ciências Sociais Unisinos* 44(1):39-48, Janeiro/abril 2008.
- Ciuffolini, Alejandra y De la Vega (2009) “Arrancando planes”: estrategias de resistencia en torno al Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. El caso de los movimientos de desocupados en Córdoba”. *Jornadas de Historia de Cba. UNC*.
- Cortés, Martín (2009) “Desafíos de la política latinoamericana contemporánea: Los movimientos sociales en la gestión estatal. El caso del Movimiento Barrios de Pie en Argentina”. Caracas: XXII Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública “La participación de los ciudadanos en la gestión pública”. Disponible en: <http://siare.clad.org/fulltext/0064303.pdf> (acceso el 03/08/2015).
- De Swaan, Abram (1992): A cargo del Estado. Barcelona, Pomares-Corregidor. Capítulo 1
- Delamata, Gabriela (2004): Los barrios desbordados: las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires. Buenos Aires, Eudeba.
- Franco, María José y Medina, Leticia (2012): “Villeros, vecinos y desocupados en el escenario de protestas en Córdoba (1989-2003)” en: Gordillo, Mónica y otros. *La protesta frente a las reformas neoliberales en la Córdoba de fin de siglo*, Córdoba, Ferreyra Editor, pp. 257-306.
- Gordillo, Mónica B. (2010): ¿Piquetes y cacerola? El argentinazo de 2001. Buenos Aires, Ed. Sudamericana.
- Gordillo, Mónica y otros (2012): *La protesta frente a las reformas neoliberales en la Córdoba de fin de siglo*. Córdoba, Ferreyra Editor.
- Kymlicka, Will y Norman, Wayne, (2002): “El retorno del ciudadano. Una revisión crítica de la producción reciente en teoría de la ciudadanía.” *Lectura N° 2, Sesión 8, Módulo Aproximaciones teóricas: Estado. Taller Interactivo: prácticas y representaciones de la Nación, Estado, Ciudadanía en el Perú*. Instituto de Estudios Peruanos. Perú. Trad. P. da Silveira
- Maneiro, María (2013): “El programa Argentina Trabaja y la reaparición de las acciones de calles de los movimientos de trabajadores desocupados. Una exploración empírica y una propuesta de modelo analítico” Ponencia presentada en el marco del I Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades y las VIII Jornadas Interdisciplinarias de Humanidades y Ciencias Sociales del CIFYH, UNC.

(2012): *De ENCUENTROS y desencuentros. Estado, gobiernos y movimientos de trabajadores desocupados*. Buenos Aires, Editorial Biblos.
- Manzano, Virginia (2014). “Demandas colectivas y formas de intervención estatal: un enfoque relacional de la política en el Gran Buenos Aires” en Forni, Pablo y Castronuovo, Luciana (comps) *Ni piqueteros ni punteros. Organizaciones populares durante el*

kirchnerismo. Buenos Aires, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (Eduulp)

(2008): "Etnografía de la gestión colectiva de políticas estatales en organizaciones de desocupados de La Matanza-Gran Buenos Aires", *Runa* 28, pp.77-92. Disponible en: <http://www.scielo.org.ar>

- Massetti, Astor (2009): *La década piquetera (1995-2005). Acción colectiva y protesta social de los movimientos territoriales urbanos*. Buenos Aires, Nueva Trilce.

- Massetti, Astor y Gómez, Marcelo (2009): *Los movimientos sociales dicen. Conversaciones con dirigentes piqueteros*. Buenos Aires, Nueva Trilce.

- Merklen, Denis (2005): *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. Buenos Aires, Ed. Gorla.

- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. "Consejos Consultivos Municipales" en *Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Manual de Instrucciones para Municipios y Consejos Consultivos*. Buenos Aires: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

- Natalucci, Ana (2010): "Aportes para la discusión sobre la autonomía o heteronomía de las organizaciones sociales. La experiencia del Movimiento de Barrios de Pie, 2002-2008". *Revista Laboratorio*, (pp. 90-108), 23, FSOC-UBA.

(2008). "Sujetos políticos, procesos de reconstitución identitaria y protestas sociales: las organizaciones piqueteras de Córdoba, 1994-2006", Tesis de Maestría en Cs. Sociales, Fac. Cs. Soc., UBA.

- Natalucci, Ana y Pagliarone, María Florencia (2013): "Revisitando los conceptos de lo social y lo político: movimientos sociales, procesos de democratización y nuevas institucionalidades". *Revista Andina de Estudios Políticos*, Vol. III, N° 2, pp. 77-98.

- Perelmiter, Luisina. (2010): "Militar el Estado. La incorporación de movimientos sociales de desocupados en la gestión pública de las políticas sociales. Argentina (2003-2008)". En Massetti, Astor, Villanueva, Ernesto y Gómez, Marcelo. *Mobilizaciones, protesta e identidades políticas en la Argentina del Bicentenario*. Buenos Aires, Nueva Trilce.

- Pérez, Germán (2013): "19 y 20 D (2001). Quilombo y política". *Observatorio Latinoamericano* N° 12, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

(2010): "El malestar en el concepto. Ejes de un debate teórico acerca de los movimientos sociales en Latinoamérica". En Massetti, Astor, Villanueva, Ernesto y Gómez, Marcelo. *Mobilizaciones, protesta e identidades políticas en la Argentina del Bicentenario*. Buenos Aires, Nueva Trilce.

- Pérez, Germán y Natalucci, Ana (2010): "La matriz movimientista de acción colectiva en Argentina. La experiencia del espacio militante kirchnerista." *América Latina hoy: Revista de Ciencias Sociales*, vol. 54, pp. 97-112. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3286795>

- Rinesi, Eduardo y Vommaro, Gabriel (2007): "Notas sobre la democracia, la representación y algunos problemas conexos" en Nardacchione, Gabriel y otros. (Eds). *Los lentes de Víctor Hugo. Transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina reciente*. Buenos Aires, Ed. Prometeo.

- Schuster, Federico y otros (2006): "Transformaciones de la protesta social en Argentina:

1989-2003. Documento de trabajo N° 48”, GEPSAC, Instituto Gino Germani, UBA.

- Schuster, Federico y otros (2005): Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea. Buenos Aires, Prometeo Libros.

- Svampa, Maristella (2005): La Sociedad Excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Buenos Aires, Ed. Tarcus.

- Svampa, Maristella y otros (2003): Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras. Buenos Aires, Biblos.

- Tarrow, Sidney (1997): Poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid, Alianza.